

LA TRANSICIÓN CHILENA: DESAFIOS Y CAPACIDADES

LUIS MAIRA

Se podría decir que las operaciones de amarre efectuadas por la dictadura, especialmente en su último año, constituyen uno de los operativos más completos y perfeccionados de este género que se puede encontrar en el estudio reciente de los sistemas políticos comparados. Su sumatoria ha empujado los rangos de maniobra del nuevo gobierno constitucional y ha terminado colocando al presidente Patricio Aylwin en una posición muy parecida a la de sus predecesores que no tuvieron respaldo de la mayoría del electorado.

Una prueba de esto es lo que ocurre ahora con el proceso de formación de las leyes. Gracias a una ley electoral que consagró un sistema de colegios múltiples binominales para la designación de diputados y senadores, la derecha obtuvo una sobre representación parlamentaria aunque, de todos modos, la Concertación Democrática pudo elegir 71 de los 120 diputados y 22 de los 38 senadores en disputa. Sin embargo, con la introducción de nueve senadores designados, el nuevo gobierno perdió su mayoría en el Senado y, con ello, la capacidad para aprobar cualquier proyecto de ley. Esto obliga al presidente Aylwin a emprender caso por caso un proceso de negociación con alguno de los dos partidos de derecha —Renovación Nacional o la Unión Demócrata Independiente— para tener la posibilidad de aprobar una iniciativa legislativa.

El resultado práctico del hábil diseño táctico de Pinochet ha sido estrechar los marcos de la transición y acentuar el carácter “gradual” y “moderado” de la nueva administración. Esto ha descartado la aplicación de cualquier medida que pudiera satisfacer las expectativas de los grupos más postergados durante la dictadura. Como ha señalado muy gráficamente el secretario general del partido Renovación Nacional, Andrés Allamand, la “llave” de la transición y de su éxito ha quedado en manos de los actuales opositores de derecha. De este modo, han terminado de esfumarse las expectativas de cambios sustanciales que ya habían perdido sentido a finales de 1986.

El gobierno del presidente Aylwin inicia así, en medio de grandes expectativas populares, una gestión que su antecesor se empeñó en dejar definida como estrecha y difícil, lo que le impondrá un esfuerzo adicional de imaginación y creatividad para tener éxito, puesto que la nueva coyuntura se caracteriza, sobre todo, por las restricciones existentes para avanzar. Conviene sistematizar algunas de estas dificultades que las fuerzas democráticas tendrán que superar.

a) Los riesgos de reactivación de la violencia. Se ha dicho varias veces que la violencia ha sido una enfermedad contraída en las últimas décadas por la sociedad chilena. Durante largos años Chile fue uno de los países más pacíficos y con una mejor convivencia política en América Latina. Esto no se contradice con el hecho de que muchas veces se ejerció la fuerza en contra de los sectores populares en masacres esporádicas que fueron jalando la historia social de país a lo

largo de este siglo. Pero en términos de la vida cotidiana, Chile era una nación donde los presidentes caminaban por las calles y donde nadie se sentía amenazado en su integridad física por sus posiciones políticas.

Este clima comenzó a cambiar en los años 60, cuando se iniciaron las transformaciones sociales con la reforma agraria del presidente Frei. Luego la espiral dio lugar a una tensa y acentuada polarización durante el gobierno de la Unidad Popular y,

después del golpe, culminó con la lógica de guerra interna y con las actividades del terrorismo de Estado desatadas por Pinochet. Este dividió a los chilenos en “amigos” y “enemigos” y dio a los últimos un implacable tratamiento de tales, lo que se tradujo en persecuciones, exilio masivo, desaparecidos políticos, exoneraciones y crímenes nunca aclarados. Se puede afirmar con toda certeza que el deseo de recuperar la convivencia y la paz fue la principal aspiración

que llevó a la mayoría de los ciudadanos a votar *No* frente a Pinochet en el plebiscito de 1988.

A partir de esta fecha y, especialmente a medida que las posturas de la Concertación fueron asumiendo un tono moderado y tranquilo, se produjo un notorio aislamiento de los sectores que defienden el uso de la fuerza, tanto en el marco de conducta de los aparatos de seguridad de la dictadura como en los grupos militares originados en la izquierda, tales como el sector autónomo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) el Movimiento Lautaro y la Comisión Militar del MIR.

Esta tendencia se acentuó todavía más luego de la elección del 14 de diciembre y en los días iniciales del nuevo gobierno. Pero ha sido bruscamente interrumpida con el dramático atentado realizado en contra de los generales de aviación, en retiro, Gustavo Leigh y Enrique Ruiz, el que fuera reivindicado por el FPMR (a) y fuertemente repudiado por casi todos los sectores políticos chilenos. Con la sorpresiva realización de este operativo se ha vuelto a poner de manifiesto el riesgo de que algunos grupos pequeños pero capaces de influir en el clima político general desencadenen, desde la extrema derecha y la extrema izquierda, una oleada de acciones de ajuste de cuentas que lleve a una virtual guerra de aparatos entre los núcleos que estuvieron vinculados a la DINA y la CNI, por un lado, y las organizaciones militares de izquierda ya señaladas, por el otro. Con un cuadro así, el gobierno de Aylwin experimentaría serias dificultades, puesto que no puede combatir al terrorismo con los métodos usados por Pinochet, pero tampoco puede mostrarse ineficaz para contener estas acciones, puesto que ello sería el pretexto que necesitan los sectores más duros del Ejército para interrumpir el proceso democrático.

La superación de la violencia y la creación de un clima de efectiva convivencia nacional que afiance al gobierno constitucional constituye el primer gran desafío que enfrenta Patricio Aylwin.

b) **Las complejidades de la deuda social.** El modelo económico del

**PALABRAS DE CLODOMIRO ALMEYDA,
PRESIDENTE DEL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE,
EN EL HOMENAJE A SALVADOR ALLENDE,
CEMENTERIO SANTA INES, 11 DE MARZO DE 1990**

Llegamos los socialistas hasta la tumba de Salvador Allende, la mañana del día en que los chilenos recuperamos el derecho a regimos por nosotros mismos, el derecho a decir nuestra palabra en libertad; llegamos la mañana del día en que el régimen militar cede su lugar a un gobierno elegido soberanamente por el pueblo.

Llegamos hasta aquí, para rendir al presidente mártir —el primero y el mejor de los socialistas— el homenaje que no pudimos brindarle durante los negros años de indignidad y de oprobio, de los que logramos sacudirnos merced a la lucha y al tesón de cientos de miles de chilenos, que conjugaron unitariamente sus esfuerzos para poner término a la dictadura y poder así reemprender la gran tarea que Salvador Allende dejó inconclusa y que los socialistas y la izquierda toda nos empeñamos por cumplir a cabalidad.

Durante la dura brega por recobrar la democracia, el ejem-

plo de lealtad que dio a Chile Salvador Allende, con su sacrificio en aras del ideal socialista, fue un incentivo y una motivación permanente, que inspiró a los combatientes por la democracia, a todos aquellos que no cesaron, que no cedieron, que no dejaron nunca de creer en aquellos valores de libertad y de justicia por los cuales Allende entregó su vida.

Ahora en este momento, frente a la tumba del presidente mártir, y ante los demócratas de nuestro país y los de cercanas y remotas tierras que han llegado a nuestra patria a celebrar el amanecer de la democracia, ante todos ellos, queremos reiterar los socialistas chilenos, solemnemente, nuestra promesa de ser fieles al legado de Salvador Allende, que fue y es un legado de unidad, de consecuencia, de amor a Chile y a su pueblo, y de fe y compromiso con la democracia y el socialismo. ☐

régimen autoritario mostró grandes altibajos en cuanto al curso de su gestión. Hubo momentos —en 1975 y 1982— que el producto cayó en forma significativa, cerca de un 12% al iniciarse la aplicación de la política de *shock* recomendada personalmente por Milton Friedman y más de 15% en la última gran recesión internacional. Pero también exhibió importantes rendimientos a partir de 1985, en un ciclo sostenido de crecimiento de los principales indicadores económicos.

Por ello la crítica a la gestión económica de Pinochet se concentró principalmente en los aspectos de la distribución del ingreso. Hubo una caída importante en el gasto social, especialmente en salud y en educación, el salario mínimo cayó en un

30% en términos reales en la década del 80 y los trabajadores fueron afectados por la inestabilidad en las faenas de las que podían ser despedidos sin ninguna causal y por los numerosos abusos cometidos por contratistas u otros intermediarios que les negaban cualquier derecho. La imagen gráfica de este cuadro fue, durante la época del plebiscito, la denuncia de que en Chile existían cinco millones de pobres; pero cuando en 1989, un organismo oficial, el Instituto Nacional de Estadísticas, publicó una Encuesta sobre Ingresos Familiares se pudo apreciar que los pobres eran en realidad seis millones y no cinco.

¿Qué hará el gobierno de Aylwin frente a esta mitad de la población chilena, llena de carencias y proble-

mas? ¿Cómo se ajustará la satisfacción de demandas innumerables con los recursos financieros que, por ahora, son limitados? Esto constituye otro gran dilema de la transición y es también muy difícil de resolver.

A este respecto se puede afirmar que las demandas que las organizaciones sociales hacen no son radicales, en la medida que no incluyen peticiones de cambios en la propiedad de las empresas ni siquiera en el *status* de los sectores más acomodados. Pero no cabe duda que, en la medida que la sociedad civil se organice y los diversos grupos tomen conciencia de lo que perdieron en los últimos años, vendrán más y más exigencias que serán difíciles de satisfacer. En este sentido el gobierno debe prestar particular atención a las políticas sobre orden público y los mecanismos de participación para integrar a las organizaciones populares en los sistemas de toma de decisión de las políticas que los afectan más directamente, en particular en los ámbitos regional y comunal.

c) **Los riesgos de la tutela militar.** El régimen del general Pinochet pasó de la proclamación de la Doctrina de Seguridad Nacional, como una suerte de teoría política propia de los círculos uniformados, a la consagración de muchos de sus contenidos en el sistema jurídico. Esto se reflejó, antes que nada, en la propia Constitución de 1980, en donde el artículo 90 define como una de las misiones principales de las FFAA el que "garantizan el orden institucional de la República". Semejante tarea, como es natural, sólo la pueden ejercer a partir de un proceso permanente de deliberación política y esto es contradictorio con su dedicación profesional a las tareas de la defensa nacional y con su subordinación a las autoridades políticas elegidas, particularmente al presidente de la República.

¿Cómo se ajustarán las relaciones entre civiles y militares dentro de este contexto? ¿Cuáles serán los mecanismos idóneos para restablecer la primacía de la dirección democrática del país respecto al quehacer de las FFAA? ¿Cómo, especialmente, se puede alterar el balance del poder actual, sobre todo si atendemos al repliegue

ordenado y a la posición de fuerza con que han salido del poder los militares en Chile?

El ámbito militar será otro de los campos complejos de la transición en el cual el presidente Aylwin debe afianzar las posiciones y valores democrático que, en la actualidad, no son todavía aceptados por los círculos castrenses más ligados a las concepciones vigentes durante la dictadura.

d) **El impacto del legado de los derechos humanos.** La dictadura de Augusto Pinochet registra un verdadero récord en cuanto a las condenas recibidas de los organismos internacionales por su violación de los derechos humanos. Durante quince años seguidos la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó resoluciones con reparos severos al registro del gobierno chileno en este campo.

Ciertamente esto no significa que el de Pinochet fuese el régimen autoritario que mayores y más graves violaciones cometía a las garantías consagradas en la Declaración Universal de diciembre de 1948. Pero sí indicaba el alto grado de organización existente al interior de Chile entre las organizaciones humanitarias que se preocupaban de estos asuntos y la eficacia del trabajo internacional de las numerosas organizaciones de solidaridad que apoyaban al pueblo chileno.

En efecto en torno al seguimiento y la documentación acerca de los lugares de detención, las modalidades de la práctica de la tortura, las desapariciones de personas, la existencia de campos de concentración o de los impactantes crímenes cometidos fuera del territorio chileno, se fueron acumulando pruebas en estos organismos de alta credibilidad, como el Comité Ecuuménico por la Paz, la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica o la Comisión Chilena de Derechos Humanos, donde destacados juristas, psicólogos y comunicadores realizaron un trabajo notable por su acuciosidad y eficacia. El resultado es la existencia de una masa de expedientes y documentos que presionan por el establecimiento de la verdad y justicia en miles de casos que no han sido esclarecidos por el poder judicial. Activos comités de víctimas o de familiares de los perseguidos desplie-

gan, complementariamente, un incesante trabajo de presión sobre los dirigentes políticos y religiosos chilenos para exigir que se avance en las investigaciones y no se permita la impunidad.

A ello se agrega el candente problema de los presos políticos, especialmente de quienes están detenidos por actos de violencia que causaron bajas en las FFAA o en Carabineros. Respecto de estos casos, los militares por un lado los elevan a la calidad de asuntos en los que se simboliza la "lealtad" y el "reconocimiento" que los sectores civiles deben prestar a los caídos, exigiendo ejemplares sanciones para los culpables. Pero, por otra parte, estos mismos asuntos son también banderas de los grupos de izquierda, que exigen un reconocimiento al compromiso y entrega de quienes tomaron riesgos en los períodos más difíciles, planteando la inmediata libertad de todos los presos políticos. La realización, en los días inmediatos a la toma de posesión del gobierno de Patricio Aylwin de una huelga de hambre para presionar por su inmediata libertad da buena cuenta de las tensiones que este problema puede ocasionar. Hay que considerar, por otra parte, que existe una poderosa organización internacional que opera en numerosos países y que reclama del nuevo gobierno la libertad de todos los detenidos.

El legado de estos asuntos pendientes en el campo de derechos humanos será muy probablemente una de las áreas más calientes y difíciles de la transición chilena.

e) **Los eventuales conflictos políticos al interior de la Concertación.** Hasta la fecha, el comportamiento de los dirigentes políticos de la Concertación Democrática ha sido notablemente exitoso y eficaz. Ha predominado en ellos una actitud positiva para buscar y perfeccionar los grandes consensos. Las situaciones difíciles han sido manejadas con prudencia, cuidándose especialmente evitar cualquier crisis. Tal parece ser, por lo demás, su disposición hacia el futuro, puesto que el trabajo común de los últimos dos años ha generado entre ellos vínculos de afecto y confianza mutua.

Sin embargo, todos estos aspectos positivos no deben hacer que se olvide que al interior del nuevo bloque oficial que respalda a Aylwin existen gérmenes de desavenencias y dificultades importantes. Para empezar, habría que señalar que ya no existen los diecisiete partidos que fundaron esta entidad y que ha habido una tendencia a la fusión y reestructuración de los sectores más débiles. El Partido Radical ha asociado en torno suyo a otras cuatro organizaciones: la Social Democracia, el Partido Radical Socialista Democrático, la Unión Socialista Popular (USOPO) y el Partido Democrático Nacional (PADENA). Hay ahora también un Partido Socialista (PS) unificado que ha sumado a los sectores de Arrate y Almeyda, además del MAPU. El Partido Humanista y los Verdes se han fusionado. Todo esto hace que el número de actores reales en la Concertación Democrática se haya reducido sustancialmente, proceso que continuará en los meses venideros.

En términos de influencia efectiva, las nominaciones realizadas para los altos cargos y el rodaje inicial del nuevo gobierno confirman que estamos ante lo que los expertos en sistemas políticos denominan en casos como el alemán federal "un gobierno de dos partidos y medio". En efecto, el gobierno de Aylwin es manejado con una participación decisiva de la democracia cristiana y el socialismo y con una influencia menor, aunque a veces importante en materia de equilibrio, del Partido Radical (PR). Y es esta simplificación del cuadro, precisamente, la que puede originar dificultades en el futuro próximo.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC), la mayor fuerza individual del país, tiene una larga tradición de búsqueda de "un camino propio". Gobernó como partido único en la administración del presidente Eduardo Frei. No tiene aquellas prácticas de flexibilidad que se aprenden con una política de alianzas estables, sino más bien una tendencia hermética que si se acentuara podría tornarla conflictiva.

El PS, por su parte, es el resultado de la unidad reciente de sectores diferenciados. Estos comparten una fuerte vocación de poder y en su interior no

PALABRAS DE JORGE ARRATE, SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE, ANTE EL PALACIO DE LA MONEDA, 11 DE MARZO DE 1990

Para expresarle nuestra adhesión, alegría y esperanza al presidente Aylwin, los socialistas entramos nuevamente a La Moneda después de diez y seis años y seis meses.

Al cruzar sus puertas rendimos homenaje al presidente Salvador Allende y a nuestros compañeros que junto a él entregaron aquí su vida.

Traemos mil heridas. Pero no llegamos a esta casa para abrirlas con odio o venganza ni para inferirlas a otros, ni siquiera a aquellos que nos las causaron.

Puño alzado en señal de espíritu rebelde de justicia, mano tendida al desamparado o perseguido, corazón de latido

libertario, amor a la vida de todos los días, sueño de futuro igualitario y tolerante. Todo eso fue Allende. Hoy los que hemos recogido su herencia decimos: no somos dolor vivido en vano. Reafirmamos su mensaje democrático y miramos hacia el horizonte para proyectarlo hacia el futuro.

Hoy alzamos nuestra voz en homenaje a Allende. Un día llegará en el tiempo de la historia en que Allende será memoria y símbolo de todos. Dejará de ser sólo nuestro y de nuestros amigos para ser de Chile entero. Será para los socialistas un gran día.

¡Viva Chile! ¡Viva Salvador Allende! ☐

pocos miran con recelos aquellas situaciones en las cuales el PDC exige y obtiene preeminencias, apareciendo en una postura hegemónica. En ellos no existen dificultades en cuanto a las alianzas, puesto que las han practicado durante décadas, pero conociendo bien su funcionamiento, tienden a actuar con fuerza y, hasta con dureza, para consolidar sus posiciones.

El PR, por su parte, exige el tratamiento de "partido grande" en las mismas condiciones de los dos principales y expresa molestias, y hasta resentimiento, cuando no recibe un tratamiento en esta perspectiva. A este respecto ya en el período del nombramiento de las nuevas autoridades se registraron problemas.

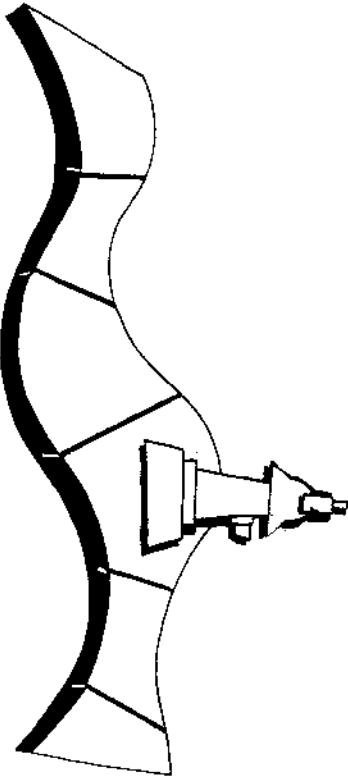
Este asunto puede tornarse más complicado a medida que transcurra el breve mandato de cuatro años de Patricio Aylwin, puesto que muy probablemente a finales de 1991 ya estará planteado el debate sobre la sucesión presidencial que incluirá, en primer término, el tema de la mantención o fin de la amplia coalición que derrotara a Pinochet y llevara al poder al actual presidente.

Los diversos desafíos que hemos enunciado constituirán una verdadero test en cuanto al éxito de la transición chilena. La agenda es compleja y, como en todas las experiencias históricas de este tipo, será difícil de resolver. Es importante tener conciencia que las dificultades se presentarán en forma bastante rápida. Hay que estar preparados para enfrentarlas y resolverlas con creatividad y generosidad.

Chile emprende en estos momentos la última transición de una dictadura de seguridad nacional a una democracia en América del Sur. Puede beneficiarse de muchas lecciones y experiencias vividas en los procesos registrados en Argentina, Bolivia, Uruguay y Brasil. Precisamente porque cada uno de estos casos fue distinto, las regularidades y procesos comunes tienen significación y ayudan a actuar mejor. Junto a ello, está el aporte inestimable de un pueblo maduro y conciente como el chileno, que ha hecho una opción definida por la democracia como su modo de vida. El de Aylwin es un gobierno de mayoría nacional, capaz de establecer una relación creadora con las organi-

zaciones sociales y populares ganando su confianza.

En la balanza de dos platillos en que se pesan por una parte los desafíos y dificultades y por otra las capacidades de resolver problemas y conquistar la historia, Chile parece estar hoy día en condiciones de consolidar una larga era de vigencia de la soberanía popular y los derechos humanos, volviendo a ser una sociedad democrática, equitativa y abierta.



DESMENTIDO INSTITUCIONAL

“El comandante en jefe del Ejército, capitán general Augusto Pinochet, al referirse al ataque terrorista contra el general Gustavo Leigh, dijo que estos hechos están comenzando.

Estimo que habrá una ‘seguidilla’ de atentados. ‘Seguirán con otros’ indicó el ex mandatario, quien habló brevemente en dependencias del Ministerio de Defensa en esta capital”.

El Mercurio, Santiago de Chile, 22 de marzo de 1990.

“—¿Considera usted como un hecho aislado el atentado contra el general Leigh?

Yo espero que sea así. He oído que el señor comandante en jefe del Ejército declaró ayer que éste es el primero y que vendría una seguidilla. Son las palabras textuales que le atribuye un diario. A mí me extraña que si él tiene antecedentes para expresar públicamente tal cosa no haya empezado por comunicármelas personalmente a mí, enfatizó el jefe de Estado con tono molesto”.

Respuesta del presidente Patricio Aylwin; *La Epoca*, Santiago de Chile, 23 de marzo de 1990.

“El Ejército de Chile, a través de su Departamento de Relaciones Públicas, negó ayer en la tarde que el general Augusto Pinochet hubiese emitido declaraciones a los diarios *El Mercurio* y *Las Últimas Noti-*

cias. La nota de la institución señala: ‘En relación a declaraciones publicadas en el día de hoy (ayer) en los diarios *El Mercurio* y *Las Últimas Noticias*, donde se atribuye al señor comandante en jefe del Ejército haber señalado, en dependencias del edificio de las Fuerzas Armadas, que “habrá una seguidilla de atentados”, que “seguirán con otros” y que “están comenzando”, respecto del ataque perpetrado contra los generales del Aire Gustavo Leigh Guzmán y Enrique Ruiz Bunger, el Departamento de Relaciones Públicas de la institución aclara lo siguiente:

1. El señor comandante en jefe del Ejército, capitán general don Augusto Pinochet Ugarte, no ha formulado, en ningún momento, tales declaraciones, así como tampoco ha recibido a medio de comunicación alguno en sus dependencias, durante el día de ayer.

2. Por tanto, son absolutamente inexactas las aseveraciones publicadas por los medios de comunicación indicados.

3. Por otra parte, la opinión pública debe saber que todo comunicado oficial sobre esta y otras materias relacionadas con el Ejército, serán canalizadas exclusivamente a través de este Departamento.

Departamento de Relaciones Públicas del Ejército.”

La Epoca, Santiago de Chile, 23 de marzo de 1990.

